LINEAMIENTOS PARA UNA REFORMA UNIVERSITARIA EN ARGENTINA

Virginia Giordano
Emilia Mestre
Catalina Serena

18 JUNIO

IDESA
Instituto para el Desarrollo Social Argentino

¡Gracias por leer nuestro informe!

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes:

IDESA 20 AÑOS

Índice

I. Introducción 4
II. Cómo está organizado el sistema universitario argentino 5
III. Cómo está organizado el sistema universitario argentino 6
1. Acceso y equidad 6
2. Financiamiento y gestión de los recursos 7
2.1 La asignación y distribución del presupuesto entre las Universidades Nacionales 8
2.2 Evolución del presupuesto Nacional destinado a Educación Superior 9
IV. Los problemas empiezan antes, en la educación primaria y secundaria 11
Anexo: Buenas prácticas internacionales 15

I. Introducción

Desde el inicio del siglo XXI, Argentina ha implementado diversas políticas públicas destinadas a fomentar la inclusión en la educación universitaria. Estas políticas han logrado aumentar significativamente el acceso a la educación superior, aunque su efectividad en términos de retención y éxito académico sigue siendo una asignatura pendiente, particularmente para estudiantes de sectores socioeconómicos más desfavorecidos.

A pesar de que el acceso a la educación superior ha mejorado gracias a medidas como la ampliación de la oferta educativa y la implementación de programas de becas, la deserción y las bajas tasas de graduación siguen siendo desafíos críticos, afectando en mayor medida a los estudiantes de bajos recursos. Estos estudiantes, aunque ahora tienen más oportunidades de acceso, a menudo enfrentan múltiples barreras que dificultan su permanencia y éxito en la universidad. En este contexto, la organización del sistema universitario y su financiamiento juegan un rol crucial. Las universidades argentinas, principalmente financiadas por el Estado, enfrentan el desafío de distribuir eficientemente los recursos para no solo mantener, sino mejorar la calidad educativa y la infraestructura. El financiamiento insuficiente o inadecuadamente distribuido puede resultar en servicios de apoyo estudiantil deficientes, falta de recursos didácticos y tecnológicos, y una infraestructura física inadecuada, lo cual contribuye directamente a las altas tasas de abandono.

Esta situación resalta la necesidad de revisar y adaptar las estrategias de inclusión, para no solo abrir las puertas de la universidad, sino también asegurar que los estudiantes puedan completar sus estudios exitosamente.

II. Cómo está organizado el sistema universitario argentino

El sistema de educación superior en Argentina se divide en dos sectores: universitario y no universitario. En ambos sectores hay instituciones estatales y privadas. El sector universitario se rige a nivel nacional, mientras que el sector no universitario es responsabilidad de los gobiernos provinciales. Un dato relevante es que dos de cada tres estudiantes del nivel superior se encuentran en el sector universitario, en particular en las universidades nacionales.

Así, el sistema comprende una variedad de instituciones que ofrecen programas académicos en tres niveles principales -pregrado, grado y posgrado-, distinguiéndose cada uno por la naturaleza y el tipo de titulación que confiera, así como por otras características específicas.

Tabla 1. Programas académicos

Nivel	Titulación
Pregrado	Técnico Universitario, Analista y Asistente
Grado	Licenciatura y Títulos Profesionales
Posgrado	Especializaciones, Maestrías y Doctorados

Fuente: Elaboración propia

De esta forma, en total hoy se encuentran disponibles 14.303 programas académicos, desglosados en 3.150 programas de pregrado, 6.437 de grado y 4.716 de posgrado, reflejando su diversidad y la amplitud de opciones educativas disponibles para responder a las necesidades de la población estudiantil.

Actualmente, la oferta educativa se imparte a través de 137 instituciones universitarias distribuidas en el país, clasificadas de la siguiente manera: 61 universidades estatales nacionales, 7 universidades estatales provinciales, 68 universidades privadas y una universidad internacional.
Es importante destacar la distribución de las universidades estatales según su tamaño, medido por el número de estudiantes inscritos. Dentro de esta categorización, sólo un 12% califica como grandes, con más de 50,000 estudiantes. Las universidades medianas, con una población estudiantil entre 10.001 y 50.000, representan el 56,7%, mientras que las pequeñas, con hasta 10.000 estudiantes, constituyen el 31,3%. Una distribución parecida se observa en las universidades privadas, donde las grandes apenas alcanzan el 1,5%, las medianas el 19,7%, y la mayoría, el 78,8%, son pequeñas.

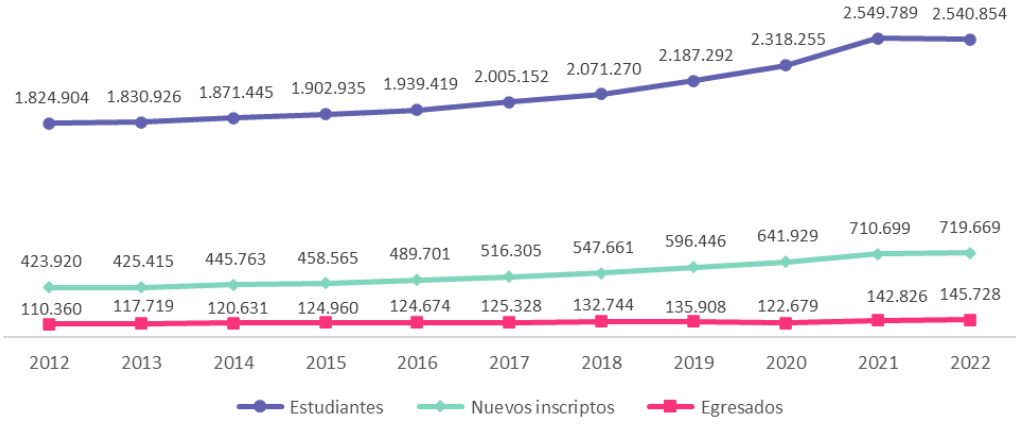
III. Cómo está organizado el sistema universitario argentino

1. Acceso y equidad

Al analizar las tendencias en el número de estudiantes, inscripciones y graduaciones en el período 2012-2022 (última información disponible) en el sistema de educación superior tanto público como privado, se observa claramente un aumento más marcado en las inscripciones y la población estudiantil en comparación con las graduaciones. Específicamente, las inscripciones han aumentado un 69%, mientras que las graduaciones solo lo han hecho en un 32%. Esta tendencia impacta directamente en las universidades estatales que agrupan al 80% de los estudiantes.

Este patrón sugiere que, aunque las políticas de incentivos como las becas y la expansión de las ofertas universitarias han sido efectivas para aumentar las inscripciones, no han logrado un impacto equivalente en las tasas de graduación. Esto apunta a problemas en el sistema educativo que podrían estar relacionados con la deserción y la dificultad de completar los estudios en los tiempos previstos.

Gráfico 1: Evolución de la cantidad de estudiantes, nuevos inscriptos y egresados de pregrado y grado en el sistema universitario argentino, público y privado. Años 2012-2022



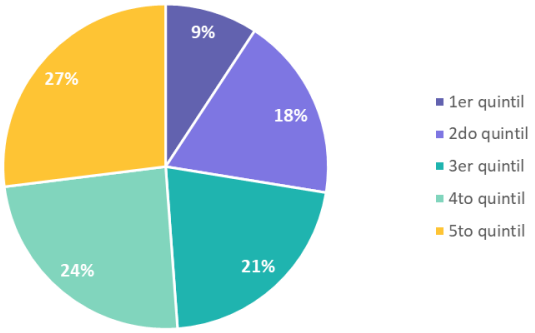
Fuente: IDESA en base a datos del Ministerio de Capital Humano.

Además, es relevante destacar que, en Argentina, la preferencia de los estudiantes a las universidades públicas se atribuye no sólo al prestigio sino también a la accesibilidad de estas instituciones, lo que resalta la limitada oferta y el menor prestigio de las universidades privadas en Argentina.

Otro aspecto preocupante en las universidades públicas argentinas es la alta proporción de estudiantes crónicos, con sólo el 23% de los graduados completando sus estudios en el tiempo teórico esperado para cada carrera.

Analizando la inclusión dentro del sistema universitario público argentino, el mismo busca ser lo más inclusivo posible a través de la supresión de toda barrera a la entrada y, en consecuencia, no existen aranceles ni exámenes de ingreso. Sin embargo, la realidad dista mucho de esto y se puede observar una segmentación social marcada en el acceso y la permanencia en la universidad, por lo cual el financiamiento público tendría un sesgo hacia los sectores de mayores ingresos. De hecho, los datos muestran que la participación aumenta a medida que aumentan los ingresos. Si se observa la estructura de ingresos de los estudiantes que actualmente asisten a una universidad, solo el 9% pertenece al primer quintil, mientras que el cuarto y quinto quintil agrupan el 51% de la masa estudiantil.

Gráfico 2: Participación por quintil en la cantidad de personas que estudian en una universidad pública.



Fuente: IDESA en base a datos de la EPH.

Esta situación presenta una alarma acerca de cuán inclusivo es el sistema donde la gratuidad de la universidad no garantiza la igualdad en el acceso, y la situación económica actual de los estudiantes y su nivel educativo previo son factores fundamentales en la permanencia de sus estudios.

Hay discrepancias significativas entre la intención de las políticas educativas y los resultados obtenidos. La creciente inscripción en universidades no se ha traducido en un aumento proporcional de graduados, y aunque un alto porcentaje de estudiantes elige instituciones públicas debido a su accesibilidad y prestigio, persisten desafíos importantes relacionados con la eficiencia del sistema. Las dificultades para completar los estudios en los plazos esperados y la distribución desigual de las oportunidades educativas entre diferentes estratos económicos, destacan la necesidad urgente de reformas profundas.

Estudios muestran que más allá de la implementación de becas y la creación de más universidades, la deserción universitaria en los sectores más desfavorecidos persiste, planteando la hipótesis de que la problemática se centra en la formación educativa que tienen dichos sectores, que está directamente relacionada con las deficiencias educativas en los colegios primarios y secundarios públicos, que son responsabilidad de las provincias. Si el nivel educativo que tienen los estudiantes que provienen de escuelas públicas no logra equipararse con los niveles requeridos en la educación superior, las altas tasas de deserción y las bajas tasas de graduación, serán una problemática persistente en nuestro sistema universitario.

2. Financiamiento y gestión de los recursos

El grueso del presupuesto público destinado al sector de universidades nacionales continúa siendo asignado bajo el mecanismo tradicional, manteniendo los montos previos por institución y negociando incrementos en función del crecimiento del gasto universitario.

Las universidades públicas en Argentina obtienen la mayoría de su financiación del gobierno nacional, que aporta el 92% de los recursos a través de las leyes de presupuesto. La prohibición del cobro de aranceles por los estudios de grado contenida en la Ley 27.015 del año 2014, y previamente la tradición histórica de gratuidad en el nivel superior de estudios, han llevado a un sistema de universidades nacionales que se financian con los aportes estatales.

El presupuesto destinado al sistema educativo superior está compuesto por distintas partidas, pero la principal fuente de financiamiento de las más de 50 universidades nacionales de toda la Argentina es el programa “Desarrollo de la Educación Superior", que explicó en el 2023 más del 90% del gasto total de las instituciones. Otros programas de menor peso son el de las Becas PROGRESAR, Infraestructura universitaria, y Evaluación y Acreditación Universitaria - CONEAU .

El 8% restante proviene de ingresos propios de las universidades, tanto por el cobro de aranceles por los estudios de posgrado, la venta de servicios de consultoría, el dictado de cursos de capacitación, la venta de bienes como libros y la presencia de actividades con aranceles de índole deportiva o cultural generan ingresos para las universidades, aunque varían mucho en función de la ubicación geográfica, la oferta académica y el desarrollo de cada institución para la venta de servicios. Además, estos recursos se asignan en su mayor parte a las mismas actividades que los generan, quedando como uso de libre disponibilidad para la universidad normalmente el 10% del total. Es importante considerar que una parte de los recursos propios que obtienen las universidades nacionales no se reflejan en la ejecución presupuestaria pues se realiza a través de fundaciones con personería jurídica propia vinculadas con las instituciones.

Una de las características distintivas de las universidades públicas de la Argentina es que reciben fondos del estado pero, al mismo tiempo, gozan de considerable autonomía de gobierno y son autárquicas administrativamente, lo que implica que no necesariamente existirá una alineación automática entre los objetivos perseguidos por el Estado y los buscados por la organización universitaria. Sin embargo, a pesar de la independencia de las universidades nacionales en su gestión y administración, esta dependencia financiera permite que el gobierno influya en las políticas universitarias, fomentando una administración eficiente y la mejora en la calidad, relevancia y equidad del sistema educativo superior.

Tabla 2. Principales fuentes de financiamiento de las universidades nacionales (en %)

Tesoro Nacional	92
Recursos Propios	8
Total	100

Fuente: Elaboración propia en base a CUINAP

2.1 La asignación y distribución del presupuesto entre las Universidades Nacionales

El proceso de asignación del presupuesto universitario entre diversas instituciones de educación superior se estructura según dos criterios fundamentales que guían la distribución de recursos.

Por un lado, se consideran indicadores fundamentales de cada universidad para determinar una distribución equitativa de recursos. Entre estos indicadores se incluyen el número de estudiantes, la oferta académica, la cantidad de investigadores y la infraestructura disponible.

Por otro lado, se involucra la discrecionalidad por parte de los responsables de la toma de decisiones, quienes tienen la facultad de asignar fondos adicionales a instituciones que enfrentan retos particulares o que mantienen una alineación política con los gobernantes actuales. Aunque estos fondos representan una porción menor del presupuesto total, son esenciales dado que proporcionan a los rectores flexibilidad para desarrollar nuevas iniciativas, al no estar restringidos a la cobertura de gastos recurrentes.

Sin embargo, además de estos criterios, también se considera la asignación histórica de fondos a cada universidad. Esta práctica introduce una inercia en la distribución de los recursos, que se ve principalmente influenciada por la rigidez de la estructura de costos donde al menos el 85% del presupuesto se destina a salarios y gastos fijos, como servicios, limpieza y seguridad. Esto limita las posibles variaciones significativas en el presupuesto anual de cada institución.

Todos estos mecanismos de financiamiento están dirigidos centralmente a financiar la oferta -las instituciones, agentes dentro de éstas, docentes o grupos académicos nucleados en cátedras o facultades-. La única excepción es la parte del presupuesto que se liga a la demanda compuesta por

un monto para becas destinadas a los estudiantes de menores recursos, para facilitar el pago de algunos costos individuales (materiales, apuntes, libros, comida, transporte o vivienda) y de los costos de oportunidad (ingresos no obtenidos por los alumnos debido a que el estudio impide o disminuye las horas disponibles para trabajar), pero que sin embargo ha tenido históricamente un alcance limitado dentro del total de recursos financieros destinados al sector, por lo reducido del monto y de la población atendida.

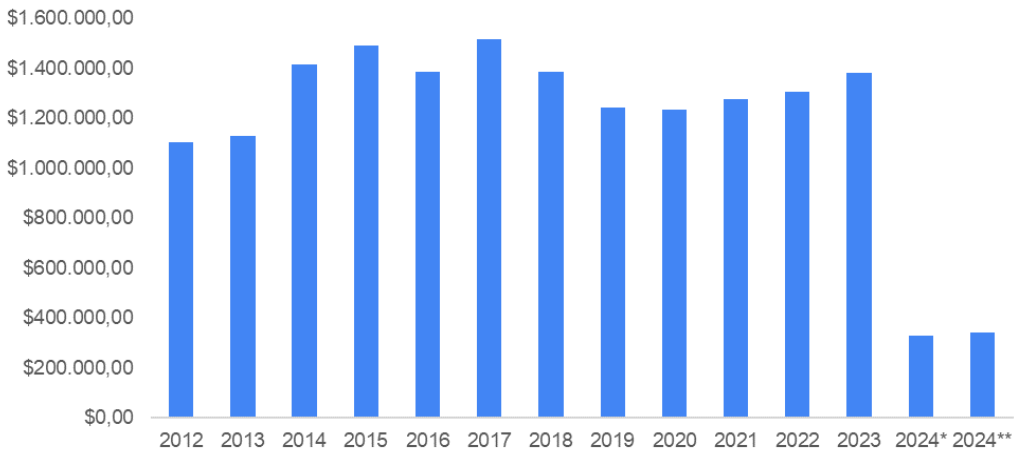
Sin embargo, en el nivel universitario esto no resulta sencillo porque la infraestructura, el equipamiento y los grupos formados de investigadores son inversiones para el largo plazo, lo cual va en contra de la inestabilidad propia de un sistema que otorga o quita los recursos en función de las preferencias cambiantes de los estudiantes. Asimismo, el personal docente y administrativo de las universidades tiene estabilidad legal, por lo cual, no resultaría viable el subsidio pleno a la demanda. El financiamiento a la demanda, en cambio, resultará más viable en los niveles educativos previos y, especialmente, para los subsidios al sector privado, que por su menor tamaño promedio, sus inversiones menos cuantiosas y sus sistemas de contratación más flexibles tienen menos barreras a la entrada y la salida de los oferentes.

2.2 Evolución del presupuesto Nacional destinado a Educación Superior

A partir de los datos proporcionados por el Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía de la Nación, se llevó a cabo un análisis para comprender la situación presupuestaria de las universidades nacionales.

Considerando las proyecciones de inflación para el 2024 del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el presupuesto destinado a Educación Superior debería ser de $5,8 billones para no caer en términos reales respecto a 2023. Si solo se ejecutan los fondos presupuestados inicialmente, la caída real en los fondos para educación superior sería del 76,3% en comparación a 2023, mientras que luego del incremento anunciado en los gastos de funcionamiento, esta reducción real se reduce a 75,3%.

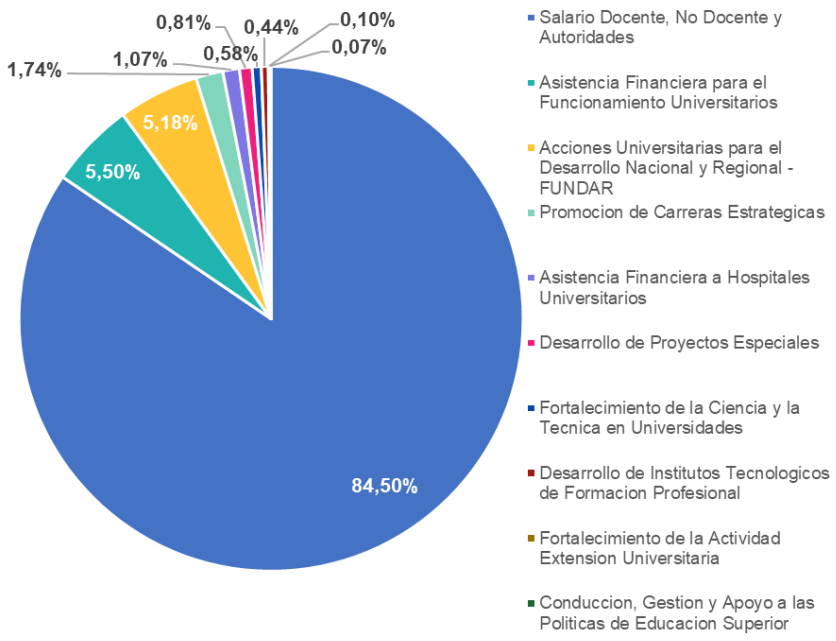
Gráfico 3: Evolución real del presupuesto de Nación destinado a educación superior, a precio de 2023.



Fuente: IDESA en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación y REM del BCRA.
2024* presupuesto inicial, 2024** presupuesto luego de los incrementos anunciados.

Si bien el gobierno nacional realizó una modificación sobre el presupuesto inicial de 2024, incrementando un 70% los gastos de funcionamiento como luz, gas y otros servicios, estos solo representan alrededor del 5% del presupuesto total. Más considerables son los salarios docentes y no docentes los cuales representan el 84,5% de los gastos totales en educación superior, por lo tanto, asegurar el funcionamiento normal de las universidades implica tener salarios reales decentes.

Gráfico 4: Participación por actividad en el gasto de Educación Superior, en base a lo presupuestado en 2024.



Fuente: IDESA en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación

Pero al analizar los valores presupuestados para educación es importante hacerlo en términos de alumnos y de instituciones. Comparando los valores de 2012 contra 2023 se observa que:

- En el 2012 el Estado nacional invertía 1 millón de pesos por año por alumno a precios del 2023 y en el 2023 invirtió 723 mil pesos.
- En el 2012 había 45 universidades mientras que en el 2023 hay 56 universidades.
- En el 2012 el presupuesto promedio por universidad era de 31 mil millones de pesos mientras que en el 2023 fue de 21 mil millones de pesos.

Estos datos muestran que el presupuesto universitario en la última década viene cayendo, cae medido en términos por alumno, pero cae aún más si se lo mide en términos por universidades. Esto se debe a que la reducción en el presupuesto fue acompañada de la creación de universidades.

La creación de más universidades que podría interpretarse como un compromiso con la ciencia, terminó operando como un acelerador de la decadencia del sistema de educación superior: muchas universidades, con pocos alumnos y docentes mal pagos por el achatamiento de la pirámide salarial.

Aplicar un ajuste sobre un sistema mal organizado no resuelve los problemas, por el contrario, en muchos casos los agrava. Es necesario emprender las reformas estructurales necesarias para mejorar la eficiencia del sistema universitario y la asignación de recursos que la Nación le transfiere.

Ante una situación económica crítica en Argentina, es fundamental revisar y fortalecer el sistema universitario para optimizar la asignación de recursos a estas entidades y aumentar las tasas de graduación, mejorando así el capital humano del país. Esto requiere una reforma integral que incluya tanto la revisión presupuestaria de las universidades como un análisis de la eficiencia del sistema educativo.

IV. Los problemas empiezan antes, en la educación primaria y secundaria

La mayoría de los estudiantes que no logran completar sus estudios universitarios pertenecen a los deciles más bajos de ingresos y provienen de colegios públicos, cuya calidad y gestión recaen en las provincias.

Analizando los resultados de los colegios públicos en las Pruebas Aprender 2023 realizadas a estudiantes de sexto grado de primaria, se observa que el 55% de los estudiantes de escuelas públicas no alcanza el nivel satisfactorio en matemática, mientras que en lengua este porcentaje baja a 40%. Pero además si se analiza por niveles socioeconómicos los resultados empeoran en los sectores más vulnerables, donde el 59% no alcanza el nivel satisfactorio en matemática y el 47% no lo alcanza en lengua.

Estos números son realmente alarmantes y muestran una situación prácticamente de estancamiento en comparación a 2013, por lo que 10 años de políticas educativas no han logrado ningún avance en el sistema educativo.

Estas deficiencias en el sistema de educación básica constituyen una barrera significativa que impide a muchos jóvenes avanzar en su formación superior, ya que no cuentan con la preparación suficiente para enfrentar los desafíos académicos de la universidad, lo que resulta en una alta tasa de deserción entre estos estudiantes.

<u>Medidas fundamentales para mejorar el desempeño en la educación básica</u>

La base de un sistema universitario inclusivo con los sectores más vulnerables se asienta en la calidad de la educación primaria y secundaria. Es crucial implementar políticas que eleven el nivel educativo en los niveles básicos para asegurar que los estudiantes estén mejor preparados para los desafíos académicos de la universidad.

Al mismo tiempo, es primordial repensar el sistema educativo y construir una transición de la escuela al trabajo para aquellos estudiantes que no deciden continuar su formación. El sistema de transición de la educación al trabajo comprende al conjunto de instituciones educativas y laborales que condicionan el tránsito de los jóvenes al empleo, contemplando la estructuración de modalidades y contenidos educativos, la conexión de las escuelas con las empresas y las regulaciones que rigen las prácticas laborales y las primeras experiencias en el empleo. Un ejemplo de esto sucede en los países de tradición germánica, donde la educación secundaria contempla modalidades que preparan a los jóvenes para su entrada al mercado de trabajo, las cuales conviven con las académicas cuya orientación es la prosecución de estudios universitarios. Su aplicación sería un paso fundamental para aumentar la tasa de empleo juvenil, implicaría desarrollar modalidades, contenidos educativos y la institucionalidad para que las escuelas se conecten con las empresas y puedan brindarle al estudiante la experiencia y formación de un primer empleo.

A su vez, para avanzar en una mejora en el sistema educativo es necesario respetar la organización federal: la educación básica es responsabilidad de las provincias y son ellas quienes deben responsabilizarse por mejorar su calidad. Por su parte, el Estado Nacional debe cumplir su rol estratégico de producir y difundir información sobre los resultados educativos de cada provincia para empoderar a los ciudadanos a fin de que ejerzan presión sobre sus gobiernos provinciales. Algunas de las medidas que podría emprender la Nación serían:

- **Evaluaciones de aprendizaje estandarizadas:** Implementar evaluaciones nacionales que permitan medir los niveles de aprendizaje de los estudiantes de manera objetiva y comparativa entre las distintas provincias. Esto podría ayudar a identificar áreas específicas donde los estudiantes necesitan apoyo adicional y fomentar una cultura de mejora continua en las escuelas.

- **Evaluaciones de desempeño para docentes**: Establecer un sistema de evaluación del desempeño docente que no solo identifique áreas de mejora, sino que también reconozca y recompense la excelencia en la enseñanza. Esto podría incluir formación continua y desarrollo profesional basado en los resultados de las evaluaciones.

- **Sistemas electrónicos de control de la historia educativa de los alumnos:** Desarrollar una plataforma nacional que integre información detallada sobre la trayectoria educativa de cada estudiante. Esto facilitaría la detección temprana de problemas y la personalización de la enseñanza, además de permitir un seguimiento efectivo del progreso del estudiante a lo largo de su carrera escolar.

- **Relevamiento nacional de infraestructura escolar:** Realizar un censo exhaustivo de las condiciones físicas de las escuelas a nivel nacional. Los datos recogidos podrían utilizarse para priorizar inversiones y asegurar que todas las escuelas cuenten con infraestructura adecuada y segura que favorezca el aprendizaje.

- **Auditorías sobre el financiamiento de las escuelas:** Implementar un sistema de auditorías regulares para asegurar que los fondos destinados a la educación se utilicen de manera eficiente y transparente. Estas auditorías ayudarían a prevenir el mal uso de recursos y a garantizar que el financiamiento se alinee con las necesidades educativas reales.

- **Sistema de pasantías:** Simplificar la legislación para el desarrollo de pasantías en todos los colegios sin importar su especialidad. Para implementar un sistema moderno de transición de la escuela al trabajo, es necesario revisar a fondo las políticas educativas y laborales, dejando atrás el anticuado prejuicio de que las escuelas no tienen el propósito de preparar a los estudiantes para el ámbito laboral y reconociendo que las pasantías pueden ser una oportunidad de aprendizaje, no de precarización laboral.

La implementación de estas medidas podría significar un cambio fundamental en la calidad de la educación primaria y secundaria, proporcionando a los estudiantes las habilidades y el conocimiento necesarios para prosperar en la educación superior y/o en el mundo laboral. Esto no solo mejoraría las tasas de retención y éxito en las universidades, sino que también contribuiría a la formación de ciudadanos más capacitados y preparados para enfrentar los retos del mercado laboral y de la sociedad en general.

Por lo tanto, es imperativo que tanto las provincias como el gobierno nacional se comprometan con estas reformas, trabajando de manera coordinada para alcanzar una educación de calidad que sea inclusiva y equitativa para todos los argentinos, que contribuya al desarrollo individual y colectivo, y que prepare adecuadamente a los futuros profesionales para contribuir efectivamente al progreso de Argentina.

V. Lineamientos para una reforma universitaria

En la actualidad, la educación universitaria en Argentina enfrenta el desafío crítico de mejorar sus tasas de graduación, las cuales son un indicador clave de eficiencia y calidad educativa. A pesar de los esfuerzos continuos por ampliar el acceso a la educación superior, persiste una brecha significativa entre el número de estudiantes que ingresan a la universidad y aquellos que finalmente se gradúan.

La reforma universitaria debería ir acompañada de una reforma de la educación inicial y media

La mayoría de las universidades públicas en Argentina ofrecen acceso gratuito y sin restricciones de ingreso, lo cual permite que muchos estudiantes se inscriban. Esto no garantiza el buen desempeño durante el trayecto universitario. Esto puede llevar a que muchos estudiantes que no están completamente preparados para la educación universitaria, sobre todo dadas las fallas de la educación media previamente discutidas.

El bajo nivel educativo con el que terminan el secundario los estudiantes, principalmente los de recursos más bajos que asisten a instituciones públicas, no será algo que podrá revertirse rápidamente en el corto plazo. Por esto, es fundamental analizar la oferta académica que se brinda en las universidades públicas, los estudiantes están cambiando su perfil y es necesario flexibilizar el sistema, ofrecer más **títulos intermedios** y también **certificación de conocimientos** para aquellos que dejan las carreras antes de terminar. Esto permitiría generar un mayor nexo entre el mundo laboral y el sistema universitario, además de generar una mayor integración entre el sistema terciario y universitario.

Dado que la educación gratuita se financia con el esfuerzo impositivo de la comunidad, se debería exigir a los estudiantes completar sus estudios en un plazo razonable. Esto podría incluir una **cláusula de tiempo estándar para cada carrera**, con la posibilidad de solicitar un receso de no más de dos años, con consideraciones específicas en el caso particular de cada estudiante. Los estudiantes que excedan el límite de tiempo sin justificaciones válidas podrían enfrentar tarifas adicionales, fomentando así la eficiencia y la dedicación en los estudios.

II. Estrategias para el fomento para graduación

La deserción y el retraso en la graduación en las universidades públicas argentinas son problemas multifacéticos, influenciados por una variedad de factores críticos. Entre estos, los factores socioeconómicos son primordiales, ya que las dificultades económicas obligan a muchos estudiantes a trabajar, reduciendo su tiempo disponible para estudiar y afectando su rendimiento académico. Además, la transición de la escuela secundaria a la universidad puede ser desafiante para aquellos que no recibieron una preparación adecuada, resultando en dificultades para adaptarse a las demandas académicas universitarias. La falta de recursos y apoyo institucional, como tutorías y servicios de asesoramiento, también juega un papel crucial, al igual que la desalineación entre las expectativas de los estudiantes y la realidad de sus carreras, lo que puede disminuir la motivación y fomentar la deserción.

Una política a desarrollar es **expandir y fortalecer el sistema de becas** y otras formas de apoyo financiero, especialmente para los estudiantes del interior, como material de estudio, comidas, residencias y medio de transporte. Esto permitiría a los estudiantes de bajos recursos dedicarse plenamente a sus estudios sin la necesidad de trabajar, factor que frecuentemente prolonga la duración de sus estudios y eleva las tasas de deserción.

También puede pensarse en programas de retención específicos destinados a grupos específicos que puedan tener tasas de deserción más altas, como estudiantes de primeras generaciones universitarias, estudiantes trabajadores, y aquellos provenientes de áreas rurales o desfavorecidas.

III. Repensar la distribución de recursos universitarios

En primer lugar, se debería instalar un mecanismo de evaluación de Necesidades y Auditoría de Recursos para evaluar las necesidades reales de cada universidad en términos de infraestructura, tecnología, recursos humanos y financieros. Esto incluye realizar auditorías para entender cómo se están utilizando los recursos actuales e identificar áreas de malgasto o subutilización.

En segundo lugar, establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la asignación y uso de recursos. Esto incluye la publicación regular de informes financieros y la creación de comités de supervisión con participación de *stakeholders* internos y externos.

En tercer lugar, desarrollar políticas que aseguren una distribución equitativa de los recursos entre universidades en áreas urbanas y rurales, promoviendo así una mayor igualdad de oportunidades para estudiantes de diferentes regiones del país.

Finalmente, priorizar la inversión en tecnología educativa que pueda ampliar el acceso y mejorar la calidad del aprendizaje. Esto incluye recursos para aulas virtuales, laboratorios de computación, y plataformas de gestión del aprendizaje.

Anexo: Buenas prácticas internacionales

El progreso económico de una nación depende en gran medida de la acumulación de capital humano calificado, es por esto que los indicadores de graduación universitaria son fundamentales. La graduación universitaria se fortalece cuando ingresan los estudiantes con un buen nivel educativo en la secundaria.

Al comparar las cifras de los resultados universitarios de Argentina, que no tiene restricciones de ingreso, frente a las de países con un sistema "restrictivo" como Brasil y Chile, se observa que, su sistema es mucho más eficaz, con mayor graduación anual y mayor crecimiento en cantidad de graduados en los últimos años.

Tabla 4. Indicadores de datos universitarios de Argentina, Brasil y Chile

Indicador	Argentina	Brasil	Chile
Evolución Graduación Total 2013-2021 (%)	21%	33%	32%
Estudiantes cada 10.000 habitantes (2021)	557	408	355
Graduados cada 10.000 habitantes (2021)	31	61	55

Fuente: IDESA en base a CEAUB

El caso del Sistema Universitario Brasilero

El sistema universitario en Brasil se caracteriza por ser riguroso y competitivo, especialmente en el sector público. Las universidades públicas en Brasil pueden ser federales -financiadas por el gobierno federal- o estatales -reciben financiación de los gobiernos estatales-. Estas entidades son gratuitas y se auditan de manera regular para asegurar que la inversión se utilice adecuadamente, contribuyendo a la calidad y sostenibilidad del sistema educativo.

En cuanto a la accesibilidad por parte de los estudiantes, el ingreso a las carreras se realiza por medio del "*Examen Nacional de Enseñanza Media*", en el que se evalúan distintas áreas de conocimiento y se filtra realmente a los estudiantes que podrán desempeñarse en la carrera.

A su vez, Brasil implementa un sistema de cupos donde al menos el 50% de los cupos en las universidades federales están reservados para estudiantes de escuelas públicas, y dentro de ese porcentaje, hay cupos adicionales para estudiantes afrodescendientes, indígenas y de bajos ingresos.

En cuanto a los estudiantes "crónicos", el sistema tiene un control riguroso, no estando permitido ser un estudiante por períodos indefinidos, para lo cual se implementan políticas para evitar esta situación y asegurar que los estudiantes completen sus estudios en un tiempo razonable.

Aunque en Brasil el ingreso a la universidad pública puede ser más difícil que en Argentina, donde no rige ningún tipo de examen de evaluación de conocimientos al final del nivel secundario ni tampoco exámenes generales de ingreso a la universidad, la tasa de graduación en Brasil es relativamente más alta.

Como se muestra en la tabla 4, mientras que la evolución de la graduación total entre los años 2013 y 2021 en el caso de Brasil fue de un 33%, en el caso de Argentina es de un 21%. Y si bien Argentina

tiene una mayor cantidad de alumnos proporcionalmente, sólo se graduaron la mitad de estudiantes que Brasil. El sistema universitario en Brasil, por tanto, está diseñado para ser inclusivo a través de las cuotas, pero también mantiene un alto nivel de exigencia académica y responsabilidad estudiantil, asegurando que la mayoría de los que ingresan terminen sus estudios.

A su vez, analizando la evolución del porcentaje de estudiantes que lograron finalizar sus estudios universitarios entre 2001 y 2021, si bien el grupo con mejor desempeño fue el de mayores ingresos, que pasó del 16,1% al 36,2%, el grupo de ingresos bajos también mostró mejoras, pasando del 0,3% al 5,4%.

Tabla 3. Población adulta que finalizó la educación terciaria/universitaria según nivel de ingresos (%)

Nivel de Ingresos	Año	2001	2011	2021
	Inferior	0,3	1,5	5,4
	Medio	1,3	4,4	11,4
	Superior	16,1	23,9	36,2

Fuente: IDESA en base a UNESCO

El caso del sistema universitario Chileno

El sistema educativo de Chile ha logrado avances significativos en las últimas décadas, lo que se evidencia en diversos indicadores clave que destacan su éxito y desarrollo continuo. Entre estos logros se incluye una alta tasa de graduación en la educación secundaria y un aumento considerable en el acceso a la educación superior.

En la educación secundaria, más del 75% de los estudiantes chilenos de entre 14 y 18 años completan su educación secundaria. Este éxito puede atribuirse a las reformas innovadoras en la gestión educativa, como la descentralización que ha transferido responsabilidades a los municipios y, a su vez, a las propias escuelas. Además, el financiamiento público a través de bonos permite que los recursos sigan al estudiante, asignándose a las escuelas, ya sean públicas o privadas, que eligen los padres.

Esta situación de éxito también se dió en el caso de la población de menores ingresos: desde el 2001 al 2020, el porcentaje de población adulta que finalizó la educación secundaria pasó del 30,6% al 58,7%.

A su vez, todos los docentes en Chile son evaluados de manera regular. Los criterios de evaluación incluyen la preparación de clases, la creación de un ambiente positivo en el aula, la efectividad en el alcance educativo a todos los estudiantes y la responsabilidad profesional del docente. Chile ha innovado significativamente en los métodos de evaluación, destacando la combinación de autoevaluaciones, evaluaciones por supervisores y pares, y observaciones directas de clases, las cuales son filmadas y analizadas por especialistas. Los resultados de estas evaluaciones se utilizan para implementar acciones correctivas, ofrecer capacitaciones dirigidas y otorgar incentivos económicos a los docentes destacados. En caso de resultados deficientes reiterados, se contempla la posibilidad de desvinculación.

Por otro lado, el acceso a la educación superior ha experimentado un crecimiento notable, pasando de menos del 20% de cobertura en el grupo de 18 a 24 años a más del 60%. Este avance es notable

incluso entre estudiantes de los quintiles de ingreso más bajos, donde el porcentaje de acceso a la educación superior ha aumentado del 8% en 1998 al 30% en la actualidad.

Teniendo en cuenta que el sistema universitario chileno se compone de un 30% de instituciones públicas y un 70% de instituciones privadas, a pesar de la predominancia de estas últimas, se ha logrado impulsar la movilidad social ascendente. Este avance se refleja no solo en un aumento en la participación de matriculados, como se mencionó anteriormente, sino también en los porcentajes de graduación, pasando de 1% en 2001 a 11% en 2021.

Tabla 6. Población adulta que finalizó la educación terciaria/universitaria según nivel de ingresos (%)

Nivel de Ingresos	**Año**	**2001**	**2011**	**2021**
	Inferior	1,1	2,4	11,2
	Medio	3,5	5,2	17,1
	Superior	19,4	24,8	47,2

Fuente: IDESA en base a UNESCO

Estos logros no son solo el resultado de políticas educativas aisladas, sino el fruto de un esfuerzo sostenido a lo largo de tres décadas por gobiernos de diversas orientaciones políticas. Este compromiso continuo ha promovido políticas inclusivas y persistentes que han fortalecido la equidad y el acceso a la educación en Chile.

A pesar de los esfuerzos por aumentar el acceso a la educación universitaria en Argentina, persisten desafíos significativos en términos de retención y éxito académico, especialmente entre los estudiantes de menores recursos. Aunque la ampliación de la oferta educativa y los programas de becas han incrementado las inscripciones, las tasas de deserción y las bajas tasas de graduación siguen siendo preocupantes.

El sistema universitario argentino, con una estructura diversa y financiamiento principalmente estatal, enfrenta problemas de gestión de recursos eficiente, lo que afecta la calidad educativa y la infraestructura. Las deficiencias en la educación primaria y secundaria también contribuyen a la preparación inadecuada de muchos estudiantes para la universidad, afectando su capacidad para completar sus estudios.

Es crucial implementar reformas estructurales que optimicen la asignación de recursos y mejoren la eficiencia del sistema educativo en todos los niveles. Esto requiere una coordinación efectiva entre el gobierno nacional y las provincias, enfocada en mejorar la calidad de la educación básica y asegurar una distribución equitativa de los recursos universitarios. Solo así se podrá fortalecer el capital humano en Argentina.